

TACEP 13 – 25 de mayo 2007

**INFORME DE COYUNTURA TRIMESTRAL
DÉCIMOTERCER INFORME, PERÍODO ENERO-MAYO 2007**

*Preparado por el Taller de Análisis de Coyuntura Económica y
Política, TACEP – Encuentro por la Convergencia*

**COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA NACIONAL E
INTERNACIONAL**

TABLA DE MATERIAS

I. Política Nacional.....	2
1. Por la boca muere el pez: crisis política y problemas de gestión en la Concertación.....	2
2. Vuelta a las fórmulas probadas: el retorno (?) de la vieja guardia.....	3
3. En la senda de los “nuevos” consensos políticos.....	5
II. La Educación.....	6
La Comisión asesora presidencial.....	6
Evaluación docente.....	6
Prueba SIMCE.....	7
Nueva ley general de educación y Comisión asesora.....	7
III. La Reforma Previsional.....	9
1.- Cuáles son las fallas principales del sistema de previsión creado en 1981.....	9
2.- Cómo intenta el actual proyecto de reforma previsional solucionar esas fallas.....	10
3.- En qué se queda corto o en que falla todavía el actual proyecto.....	10
4.- Yendo al fondo del problema: la privatización de un sistema público lleva a preguntarse dónde se encuentran los dineros aportados?.....	10
IV. El Transantiago.....	11
Datos del problema.....	11
Los puntos más conflictivos de este drama.....	11
El ingreso del Transantiago a la política.....	12
Reflexiones de fondo – más allá del Transantiago.....	13
v. El Contexto Latinoamericano de Movimientos Sociales en Crisis del Neoliberalismo.....	13
Crisis orgánica, refundaciones neoliberales y proyectos alternativos. Los fantasmas que recorren el continente.....	13
Elementos para una caracterización de los movimientos populares en A.L.....	14
Tensiones y contradicciones.....	14
El momento de crisis y los movimientos sociales. El caso boliviano.....	14
Reflexiones y debates a partir de la situación política en Chile.....	16

Preludio

El equipo del taller de redacción del presente análisis de la coyuntura económica, política y social ha elegido sólo cinco temas para su análisis. Somos conscientes de que no se abordan todos los temas atingentes de la realidad nacional y latinoamericana. Pero los seleccionados van presentados de tal manera, que desde ellos se esbozan vínculos hacia otros aspectos que será necesario profundizar en el futuro.

I. Política Nacional

1. Por la boca muere el pez: crisis política y problemas de gestión en la Concertación

Durante los últimos meses, una pregunta que se ha vuelto recurrente es la que se realiza a la posibilidad de perspectivas de futuro a la Concertación. Frases que hace algún tiempo podrían haber escandalizado al más crítico de los concertacionistas, hoy se han vuelto parte de un estado de ánimo generalizado en los partidos y el gobierno. Lo interesante es que las declaraciones ya no son sólo de un grupo particular, sino que se han generalizado entre sectores que guardan orígenes y/o intereses diversos.

La generalización de las críticas internas muestra que la Concertación ha entrado en un proceso de desgaste (aún más, podría pensarse que de descomposición), pero no por virtud de la derecha, que se afana en el oportunismo, ni por la acción de algún movimiento oposicional. El problema de la Concertación está en las bases mismas de su sentido fundacional y las características del modelo de hacer política que ha establecido por 17 años.

En “clave Concertación”, gobernar es transar, negociar, consensuar. Donde el gran consenso fundacional de los poderosos lo podríamos resumir de la siguiente manera: primero, el convencimiento de que el mercado es la mejor forma de asegurar el bienestar económico-social; segundo, la democracia depende de la estabilidad y una institucionalidad que permita el desarrollo del mercado, y la capacidad de contener el potencial conflictivo que significan las demandas sociales de la mayoría. La gobernabilidad es un término que precisamente sirve para referirse al estado o la “buena salud” de ese acuerdo, y así como en los ‘80 los “garantes del orden” eran los militares, ahora la elite política aparece como la “garante de la gobernabilidad”.

Sobre ese acuerdo ha operado la Concertación, como vemos, necesariamente siempre en conjunto con la Derecha. En este marco los sectores dominantes han buscado (y logrado, sin duda) limitar cualquier posible discusión fundamental sobre el modelo de desarrollo. La preocupación principal pasa a ser entonces la administración y la gestión del acuerdo. En otras palabras, la política como discusión de proyectos colectivos se bate en retirada ante el gobierno de los técnicos, de los especialistas de la gestión pública y la ingeniería electoral. De hecho toda la Reforma y la Modernización del Estado que marcó parte importante de los gobiernos de Frei y Lagos no es otra cosa que la consolidación institucional de esta visión.

Sin embargo, a pesar de la relevancia de la gestión técnica como forma de hacer política de gobierno, los últimos hechos van presentando una incapacidad creciente en ese sentido. Los problemas del Transantiago, el desastre de las políticas educacionales, la política ambiental o incluso las propuestas de Velasco para “apoyar” a las PYMES, no son ni aislados ni fortuitos.

La gestión (y más aún la planificación) no puede ser eficaz cuando no existe un horizonte político que la sustente, cuando todo se hace a propósito de la coyuntura. Lo que ha ocurrido en los últimos meses puede ser visto justamente como una radicalización de la **incoherencia entre gestión y proyecto**. Entre las evidencias de esa incoherencia podemos mencionar dos prácticas bastante claras: a) el condicionamiento frente a intereses del sector privado, y b) la corrosión del sistema político y de administración pública, instrumentalizado hacia fines electorales.

- El condicionamiento frente a intereses del sector privado significa básicamente que las políticas públicas se hacen en respuesta a las demandas de estos sectores por mayores espacios de inversión y seguridad para las ganancias, y por tanto es con ellos con quienes se planifica y frente a quienes se rinde cuentas. Es parte de lo que sucede en el Transantiago.
- La corrosión del sistema y la administración tiene como causa la ausencia de una visión política y ética de gobernar. De algún modo los viejos cuadros de la Concertación, formados al calor temprano del reformismo y la revolución (según sea el caso), en la maduración de la experiencia crítica de la renovación y la templanza de la negociación, no han logrado dar sentido a la coalición como proyecto. De ahí entonces, con el poder en las manos, lo que se instala es la coalición como negocio, es decir, son socios porque les conviene, y esa conveniencia se instala como interés general del país.

En base a ello, es claro que lo único que puede instalarse como práctica de gobierno y administración es la corrupción.

En definitiva, por la boca muere el pez... por la boca mueren los viejos políticos concertacionistas declarando la crisis; por la boca mueren los jóvenes técnicos concertacionistas justificando los problemas de gestión.

2. Vuelta a las fórmulas probadas: el retorno (?) de la vieja guardia.

Estos problemas de gestión exacerbados por un gobierno con escasa legitimidad (por ende, muy permeable al ataque de los Medios de Comunicación de Masas) han tenido como intento de respuesta del Gobierno la vuelta a las “formulas probadas”, cuya principal, y más palpable expresión está en el ingreso de José Antonio Viera-Gallo (probado articulador parlamentario) al gobierno, a cargo de la relación con el Parlamento. El ingreso de René Cortazar (ex Ministro del Trabajo durante la administración de Aylwin) a Transportes y Telecomunicaciones es también una muestra de ello.

Con dicho cambio de gabinete se clausuró lo que parecía ser la decisión de instalar innovaciones (nuevos rostros, mixtura entre experiencia y renovación) en la gestión de este cuarto gobierno de la Concertación: se acabó la paridad de género, ya no es válido el postulado de que nadie se “repite el plato” y, lo que es más importante, de gobierno ciudadano no hemos visto ni veremos nada. Lo relevante del nombramiento de Viera-Gallo y Cortazar es que ambos representan claramente una forma de hacer política desde las cúpulas y mediante la lógica de la negociación hacia el logro de “grandes acuerdos nacionales”.

Los curriculum de estos ministros son claros: Cortazar fue uno de los principales gestores del pacto social y apaciguamiento de las demandas laborales a inicios de la transición; su política de “acuerdos tripartitos” no sólo “recortaba” las demandas de los trabajadores, sino que buscó explícitamente coartar la capacidad de las organizaciones sindicales. ¿El mecanismo?, negociar por arriba y fragmentar el movimiento apostando a acuerdos en donde las demandas sociales llegan hasta donde los empresarios consideran pertinente.

La trayectoria de Viera-Gallo también lo avala, son 16 años en el parlamento llevando a cabo una política de acuerdos cupulares. Con él se ha echado a andar una reforma a la composición del parlamento, sin cambiar el sistema binominal y manteniendo las correlaciones de fuerza en el congreso, con el fin de integrar a la política institucional a actores hasta ahora desplazados.

Ahora ¿qué queda de gobierno ciudadano? Queda claro que simplemente no lo fue ni lo será. Frente a las crisis, la presidenta Bachelet trata de echar mano a las fórmulas que a la Concertación le han dado resultado: 1) no molestar a los poderosos (los intereses imperialistas, los grandes empresarios nacionales, los militares, la iglesia, etc.), 2) negociar con la derecha (por la vía de Viera-Gallo)¹, y

¹ Sobre todo, ante la nula capacidad de la Concertación de contenerse a sí misma (y de ahí la irrupción de los “díscolos”). Expresión de esta incapacidad de lograr una visión de proyecto político, es el reciente rechazo de la “Ley de Depreciación Acelerada”

3) echar por tierra cualquier intento de organización social, incluyendo cualquier atisbo de participación.

En la presente coyuntura se observa la utilización de dos mecanismos que buscan entorpecer los intentos de organización social.

- El primero y ya clásico (en el sentido de que ha sido ampliamente utilizado en todo el periodo concertacionista) consiste en el entorpecimiento institucional (trabas al funcionamiento y alcances de la organización popular) y político (el sentido de que se intenta demostrar que mediante la organización no se consigue nada) de la organización.
- El segundo mecanismo es la administración de la inseguridad. El neoliberalismo trae consigo la mercantilización de la vida, lo que implica que son los individuos los únicos responsables de dar respuesta a sus necesidades, lo que se expresa en la flexibilización laboral, en la privatización de la educación, las pensiones, etc. Lo nuevo sería, a nuestro parecer, que el Estado estaría buscando responder en parte a estas materias, a dicha inseguridad, pero mediante una acción vertical e incluso autoritaria, sin consultar (consultarnos) a los actores sociales o al mismo ciudadano atomizado.

Se pretende con ello una integración pasiva, que no apunta a la construcción de sujetos sociales o siquiera ciudadanos activos. ¿En qué redundo ello?: un botón de muestra lo obtenemos desde el sistema Chile Solidario que entiende la pobreza como un asunto individual, en el Plan Auge o la reforma previsional que se discutieron sin escuchar ni atender los planteamientos de los sectores sociales.

¿Qué implica ello?, que la inseguridad respecto del cómo estructurar un *proyecto de vida* se mantiene, porque incluso con el otorgamiento de ciertos beneficios “redistributivos”, así como estos “derechos” se han otorgado verticalmente, desde la *conciencia estatal o política*, así mismo se pueden retirar en cualquier momento. No son derechos adquiridos mediante la lucha como en el periodo que llega hasta 1973, donde los derechos fueron conseguidos mediante la acción colectiva; por ende, su defensa es cuestión de los mismos que hoy los “garantizan”.

Esta inseguridad es también persistentemente remarcada en la apelación a la delincuencia. Ello ha dado pie a la constitución de un “Estado Policial”, distinto del Estado Represor que aparece a inicios de la Dictadura, y del Estado Contrainsurgente que se articula en los primeros años de los gobiernos concertacionistas. La apelación a la delincuencia ha repercutido en la profundización de la atomización social, al fomentar los estereotipos y con ello, la desconfianza con el de al lado: cualquiera puede ser un delincuente y en ninguna parte se está seguro, salvo en el “hogar”.

Lo anterior claramente sirve para entorpecer la organización social, aunque ello sea aún más claro en la criminalización de la acción política. En la presente coyuntura hemos asistido al constante amedrentamiento, a la tergiversación de las protestas por el Transantiago y al despropósito en que Belisario y sus secuaces convirtieron el día del Joven Combatiente, transformándolo en un supuesto “día de furia” en el que se expresan todos nuestros “más profundos instintos”². En hecho político es que con ello se criminalizó no sólo dicha manifestación, sino que también todas las pequeñas protestas que pobladores estaban realizando a propósito de la crisis de Transantiago, las incipientes protestas pingüinas, etc.

El asesinato de Rodrigo Cisternas en Arauco es el ejemplo más palpable de este Estado Policial, que no está dispuesto a aceptar a organización y movilización social, y que para ello no sólo está dispuesto a seguir la sinfonía de la insegurización con la delincuencia, sino que también a seguir matando (Claudia López, Daniel Menco, Alex Lemún, entre otros).

² El titular del diario Las Últimas Noticias del día 30 de Marzo recordaba la jornada anterior con estas palabras: “Día del Joven Delincuente”.

3. En la senda de los “nuevos” consensos políticos

Lo que nos deja la coyuntura analizada, más allá de las fisuras y malestares que la crisis abre en amplios sectores de la sociedad, es la conciencia para las elites políticas de lo imprescindible que les resulta hoy la renovación de su proyecto, dado que al parecer asistimos a la evidencia más explícita de los últimos años de *agotamiento* de la Concertación.

Este agotamiento es leído por las elites desde la siguiente fórmula: la Concertación ha sido una coalición exitosa en tanto ha dado gobernabilidad al país, en sus tres objetivos fundamentales: consolidó la apertura de la economía chilena más allá de sus limitantes dictatoriales; tuvo éxito en la conducción de la transición política y social desde la dictadura a la democracia; y logró mantener el conflicto social a raya. El punto estaría dado por el hecho de que las condiciones estructurales y simbólicas que marcaron la necesidad de organizar fuerzas, acuerdos, etc. en este sentido (que marcan el éxito de la Concertación) hoy han cambiado: Chile requeriría de un nuevo proyecto de país, ya no limitado por las condiciones de los '90, en tanto su sociedad ya no es la misma de los '90.

Ernesto Ottone, en su recientemente publicado balance sobre el gobierno de Lagos, del que formó parte como asesor directo desde el famoso “segundo piso”, ha ubicado la significación histórica de dicha administración en el hecho de que habría instalado la necesidad estructural de ir más allá del Consenso de Washington y del neoliberalismo ortodoxo en materia de política macroeconómica y fiscal. Su perspectiva, y en definitiva la impronta que habría dejado la administración Lagos como legado a la Concertación, es justamente la búsqueda de fórmulas que permitan renovar el pacto social a través de la instalación de un Estado de Bienestar de nuevo tipo, que garantice los mínimos sociales de manera no focal, sino ampliada, pero que no limite por ello la capacidad de inversión del capital.

Como se dijo más arriba, esta propuesta se encuentra en sintonía con la política dirigente que tiende hacia la integración por vía vertical, por decirlo de algún modo, integración sin participación, sin proposición, sin demanda social. Más allá de la veracidad del planteamiento de Ottone, la verdad es que su provocación es una más (tal vez, la más sistemática hasta ahora) de muchos intentos que pretenden reenfocar el discurso político hacia la construcción de un nuevo relato histórico de país, de un nuevo escenario donde las necesidades sociales y quienes las encarnan y garantizan su solución (las mismas elites dirigentes) son proyectadas.

A esto apunta también, ciertamente, el documento “La Disyuntiva”. Y no sólo por los contenidos manifiestos que en dicho documento aparecen, y que se acercan a lo que podríamos ver como una crítica a las versiones ortodoxas del modelo neoliberal (Andrés Velasco a la cabeza), sino fundamentalmente por la composición de personajes que suscriben dicho documento: al igual que “el laguismo”, se trata de una articulación transversal a los partidos políticos que conforman la Concertación, aunada con la evidencia del desgaste de su proyecto.

Del mismo modo, pero con un impacto político aún poco definible, el fracaso del proyecto de depreciación acelerada del ministro de Hacienda y la apertura de la discusión política hacia el problema de las PyMES ha permitido a la disidencia de derecha de la DC y de la Concertación (Adolfo Zaldívar a la cabeza) una nueva tribuna para la discusión respecto de la Economía Social de Mercado (limitada por las capacidades de articulación política del sector colorín de la DC, pero no por ello expulsable del escenario panorámico que queremos mostrar). Por último, debemos ubicar en esta panorámica la propuesta de Frei de estatización del Transantiago.

Lo importante de esta coyuntura, donde *en apariencia* se rompen los consensos tácitos de la elite dirigente, consiste en que deja ver dos situaciones igualmente significativas:

- todas estas propuestas guardan *aún* como matriz la posibilidad de renovación *interna* de la Concertación; en ese sentido, la disputa tiene que ver con la hegemonía ideológica en el seno de esta coalición (y su sintonía con las expectativas sociales) más que con la búsqueda de nuevos ordenamientos de las correlaciones políticas;

- estas fisuras tienen la tremenda significación de abrir flancos de reorganización discursiva de sectores políticos aún en ciernes, en su búsqueda de articular un proyecto político que se acerque más a los intereses y necesidades de los sectores sociales y populares excluidos durante los 33 años de neoliberalismo no sólo en lo que a participación del producto social refiere, sino que fundamentalmente a sus capacidades políticas de instalarse en los escenarios nacionales y disputar con las élites dirigentes *proyectos específicos de país*. La movilización pingüina del 2006, en este sentido, fue la primera evidencia de que *el modelo no es verdadero por sí mismo*, que su verdad tiene que ver con la capacidad social de movilización de intereses colectivos.

II. La Educación

La llamada “Revolución de Pingüinos”, fue el acontecimiento que impuso el tema de educación en la coyuntura nacional, a partir de 2006, pues no estaba en la agenda de la presidenta Bachelet, como no lo había estado en la de los gobiernos anteriores de la Concertación, el realizar grandes cambios de carácter estructural a la educación. Las modificaciones tan sentidas por los estudiantes secundarios como la derogación de la LOCE, la reforma a la JEC, la gratuidad en el transporte y la PSU, la ampliación de las becas, no sonaron ni de pasadita en la cuenta pública del año pasado.

Luego de la represión por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros, el 25 de abril de 2006 (ver TACEP 13), la organización estudiantil comenzó a madurar y se produjo un proceso de reestudio de sus demandas, sintetizadas en una plataforma única a nivel nacional, que contenía a grandes rasgos las demandas señaladas en el párrafo anterior.

La Comisión asesora presidencial

Sin duda uno de los principales coletazos, en el plano de lo institucional de la revolución de los pingüinos fue la *Comisión asesora presidencial para la educación*. Esta, fue integrada por 81 miembros, entre ellos especialistas en educación, académicos, personeros de distintas confesiones religiosas, representantes de las etnias originarias y de los distintos actores del quehacer educacional del país: de los padres de familia, de los estudiantes secundarios y universitarios, de los docentes y codocentes, de los sostenedores municipales y privados, de los rectores de las universidades.

Los resultados de esta comisión los tenían claros los estudiantes secundarios (organizados) ya a fines del 2005, pero era necesario que lo señalaran personeros que funcionan dentro del ámbito oficial. Alguno de los temas de consenso del informe final fueron: una educación de calidad que pasaría a ser un derecho exigible garantizado por el Estado, la creación de una agencia especializada para asegurar la calidad de la educación, la tan mentada Superintendencia de Educación, la necesidad de reformular el sistema de financiamiento de la educación, la permanencia de un sistema de provisión mixta (sostenedores públicos y privados) y el establecimiento de una nueva carrera docente, entre otros.

Cabe señalar la participación fundamental en la Comisión, de personajes como la Sra. Patricia Matte de la Sociedad de Instrucción Primaria, y el Sr. García-Huidobro, los cuales constantemente trataron de aislar al Bloque Social de Educación, formado por secundarios, profesores y universitarios, acusándolos de radicalizar el debate. En relación al retiro de estos últimos, el Sr. García Huidobro señaló: “ellos argumentan que no lo hacen por sus aportes al debate, sino porque el informe como está, no los representa a cabalidad, pero cada uno de los 80 consejeros puede decir lo mismo: si tienes una mesa con 80 personas donde cada uno opina, por supuesto que hay en el informe juicios que no todos comparten”.

Evaluación docente

Los profesores, por su parte, han continuado planteando su demanda histórica de mayor participación estatal tanto en el diseño como en el financiamiento de nuestro sistema educativo. Incluso la idea original de no someterse a la evaluación docente del Mineduc propuesta por el Colegio de Profesores, ha ido dando paso a una paulatina aceptación e incluso a una concomitancia respecto de la idea de evaluar a nuestros profesores, todo esto acompañado de mejoras salariales,

que evidentemente no cuestionan los problemas de fondo de la educación, en cuanto a sentido, financiamiento, estructura y resultados, tremendamente clasistas y que cada año alejan más los logros de la educación de los pobres versus la educación de ricos.

La evaluación docente, cuyos resultados se publicaron a fines de marzo, dio cuenta de un gama muy amplia de profesores, de los cuales la mayoría esta ubicada dentro del rango “competente”, sin embargo, y este es el punto preocupante, un porcentaje no menor se encontró del rango declarado como “insatisfactorio”. Evidentemente aquellos profesores que se encontraron en esta categoría correspondían en su totalidad al sistema de escuelas municipalizadas y particulares subvencionadas. Es clara la naturaleza del origen de esta problemática, y al incorporar al análisis los resultados del SIMCE (sistema de medición de la calidad de la educación) el panorama es catastrófico, pero dentro de todo coherente bajo la mirada neoliberal: escuelas de ricos para formar patrones, escuelas de pobres para formar mano de obra barata y escasamente calificada.

Prueba SIMCE

Durante el mes de mayo se publicaron los resultados del SIMCE aplicado a los cuartos básicos y segundos medios durante el recién pasado año 2006. Una vez más, estos han dejado en claro un tema que no es de mera percepción, sino que de porfiadas estadísticas: *la educación que reciben los hijos de nuestro pueblo está a una distancia estratosférica de aquella que reciben los hijos de los patrones*. El promedio nacional fue de 252 pts. en matemática y 254 en lenguaje. En el caso de la Región Metropolitana, los colegios clasificados por el propio Mineduc, según los ingresos de las familias, como correspondiente al grupo socioeconómico *bajo* (promedio de ingresos de \$145.934) obtuvieron un promedio de 213 y 224, respectivamente. Como contraparte los colegios clasificados como de familias pertenecientes al grupo *alto* (promedio de ingresos de \$ 1.439.082) obtuvieron 327 y 306, también respectivamente.

Esta situación no es nueva, sin embargo nos deja en claro una situación que nos han demostrado las pruebas internacionales a las cuales se ve sometido nuestro sistema educacativo como la CÍVICA (Civic Education Study), la PISA (Programme for International Student Assessment), la TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) y la LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación). Muchos de los resultados de estas pruebas se han visto cuestionados por las autoridades del ramo, sin embargo no hacen otra cosa que saber lo que todos sabemos: que en Chile existe una educación para hijos de obreros y otra muy superior para los hijos de los patrones, son el corolario de una educación pensada como lucro empresarial y no al servicio de *los más*. Es la educación para la mano de obra barata, que puede aumentar su cobertura, puede llenarse de computadores, pero jamás mejorará su calidad para nuestro pueblo, porque sigue siendo diseñada y administrada *por y para los menos*... Y de hecho mientras Bachelet aumente y aumente el financiamiento en 650 millones de dólares o más, estos tarde o temprano irán a parar a los bolsillos de inescrupulosos sostenedores, que así como administran parrilladas, como la famosa y pinochetista *Cuca*, son dueños de colegios y en ningún caso tal situación será revertida de no mediar un cambio estructural en la lógica de la educación chilena.

Nueva ley general de educación y Comisión asesora

En este sentido, el proyecto de la nueva *ley general de educación*, hecha a la medida del capital, a pesar de poner énfasis en ámbitos tales como la equidad, la calidad de la educación, la participación de la comunidad educativa en las decisiones, la responsabilidad de todos los actores, la flexibilidad y la transparencia, finalmente no altera la situación de mercado que opera en el sistema y que sin duda es la principal responsable de los miserables resultados de nuestro sistema educativo. En pos de una supuesta libertad de enseñanza se escudan las más oscuras patrañas de los mercaderes de la educación, que antes con la LOCE y seguramente con el nuevo proyecto de ley, encontrarán las bases del enriquecimiento y los malos resultados que no sólo el SIMCE sino la PSU y las pruebas internacionales, que de cuando en cuando nos dejan en claro, que en Chile el gobierno espera obtener resultados comparables a países como Finlandia y Suecia, con una inversión ni siquiera comparable a los estándares históricos y con las decisiones del sistema educativo en manos

de mercaderes que jamás han tenido, ni piensan tener, la educación de los pobres como su principal objetivo.

Después de entregado el Informe Final de la Comisión Asesora de Educación a la Presidenta, esta mandató a un equipo de ministros para que realizaran los cambios pertinentes para generar la Ley General de Educación LEGE que fue presentada al congreso, dentro de este equipo de ministros se encontraban el grupo político, económico y de educación. El resultado de esta presentación de la ley al congreso es que ciertas autoridades, parlamentarios, y ex ministros de educación se han manifestado públicamente que vetarán el proyecto de ley que derogará la LOCE. Claramente esta negativa acata a motivaciones particulares que defienden el interés de unos pocos en desmedro de las grandes mayorías que el año pasado demandaron una educación pública de calidad.

Por otra parte, los estudiantes secundarios se encuentran en un proceso de re-acomodo y reestructuración de la fuerzas políticas, las divisiones que se vieron al finalizar el año pasado y al comienzo de este año, se han hecho más patentes, así como también los cambios de los Centro de Estudiantes, productos de los recambios generacionales le han pasado la cuenta, aunque estos no han sacado un pronunciamiento oficial, entre ellos, se escuchan, que finalmente no le toman importancia ya que ellos se restaron cuando el Bloque Social de Educación no quiso firmar la entrega del informe final de educación. Por su parte, estos no le ven viabilidad al proyecto y no descartan re-organizarse, unirse más fuerte al bloque de educación y preparar nuevas movilizaciones

Los estudiantes universitarios agrupados en la confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y la Asamblea de Estudiantes de educación Superior (AESUP), están confusos y gratamente empeñados en participar de esta nueva Comisión Asesora Presidencial de Educación Superior. Es raro, más cuando se sabe que la anterior comisión encargado por la presidenta no fue del gusto de estos. Bachelet en uno de sus tantos compromisos adoptados, para apagar estos incendios producto del descontento de la ciudadanía, el día 11 de diciembre de 2006, constituyó la primera reunión de trabajo con académicos y expertos que integran la Comisión Asesora Presidencial de Educación Superior.

Este grupo que nació posterior al trabajo del Consejo Asesor para la Calidad de la Educación, deberá analizar entre otros el tema del financiamiento de la educación superior, la calidad de la enseñanza y el marco regulatorio.

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, presidirá la comisión asesora y adelantó que se darán un plazo de seis meses para evacuar un informe con el diagnóstico de los desafíos y problemas que enfrenta la educación superior. En una de sus declaraciones, indicó que esta comisión no fue formada sólo para proponer reformas legales a la LOCE, sino que "tiene por objeto deliberar acerca de los distintos desafíos que encara hoy el sistema de educación en Chile sin ninguna restricción". Además, indicó que es una comisión distinta a la del Consejo Asesor Presidencial, se utilizará una metodología similar a la desplegada en dicha instancia, aunque con reuniones más espaciadas.

La instancia está integrada por 25 personas: seis rectores de las universidades que integran el Consejo de Rectores; cinco rectores de universidades privadas sin aporte fiscal; cinco expertos en educación superior; seis representantes de los estudiantes elegidos por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y la Asamblea de Estudiantes Superiores (AESUP), un representante de institutos profesionales y centros de formación técnica; el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Julio Castro, y un abogado del Departamento Jurídico de la División de Educación Superior del Ministerio.

Sin duda la cuenta presidencial del 21 de mayo puso un especial énfasis en el tema de la educación y de hecho, las principales repercusiones del discurso de Bachelet han estado relacionados con la millonada ofrecida... Los 650 millones para este año, hasta llegar a una inversión total de 5 mil millones de dólares.... Dejando planteada nuevamente la vieja interrogante, casi un ser o no ser: ¿Dónde irá a parar la millonada? Es altamente probable que finalmente Libertad y Desarrollo termine imponiendo, vía Matte y Compañía, en virtud de la *Libertad de Enseñanza* un buen destino

para las subvenciones preferenciales y el incremento de un 15% anunciado para las ordinarias.

El anunciado Fondo de apoyo para la educación municipal deberá someterse a las pruebas mencionadas. Sólo entonces se podrá juzgar de sus eficacia. Dejamos nuestro juicio, por ahora, en suspenso, aunque tememos que no se refleje en los resultados que estos establecimientos obtengan en las pruebas mencionadas y que la *brecha tecnológica siga creciendo como la fractura de Aysén*. También es probable que la tan mentada calidad y equidad en la educación se quede sólo en bonitos discursos, y que finalmente la educación técnico profesional siga siendo aquello para lo que fue creada, la generación de técnicos con escasa calificación y competencias básicas que bien sirven para incrementar la acumulación del gran capital y las transnacionales que han encontrado en la *copia feliz del Edén* su paraíso.

Evidentemente el centro del conflicto es la LOCE y mientras subsista en su estructura, aunque sea con otro nombre, la ley general de educación, las desigualdades y los precarios resultados de la educación para los pobres, persistirán. Ese es el conflicto, el resto es palabrería y artes circenses, de las que la Concertación y sus aliados de la derecha ya nos tienen acostumbrados. Los secundarios durante el 2006 señalaron el camino. La tarea ya está planteada para el campo popular, ahora sólo resta asumirla.

III. La Reforma Previsional

1.- Cuáles son las fallas principales del sistema de previsión creado en 1981

a) que **deja fuera de sus beneficios a un 40% de la población**, debido a que muchos no cotizan ni siquiera los 20 años que se exigen como mínimo, debido a cambios de empleo y trabajo informal, - lo que afecta sobre todo a las mujeres - ni todos los hombres trabajan cotizando los 35 años, ni las mujeres los 40 que se requerirían para obtener una pensión que represente el 70% de sus últimos ingresos.

Esto se ve con claridad si se describe el perfil típico de los afiliados a las AFPs:

Más de la mitad de los afiliados a las AFP (Diciembre 2004) son mayores de 37 años y cotizan menos de 4,2 meses por año. A ese ritmo, van a acumular menos de 184 cotizaciones al cumplir la edad de jubilar, por lo tanto no van a tener derecho a pensión mínima estatal (requiere 240 cotizaciones). Tienen acumulado menos de \$1.362.673 en su cuenta de capitalización. Tienen sueldos inferiores a \$202.094. Con esos datos, van a acumular al jubilar menos de \$ 8.317.482. Lo que les arroja una pensión inferior a \$48.844 mensuales (suponiendo una rentabilidad del fondo de 4,5% real anual).

b) que **la administración del sistema se lleva mucho dinero**: Las AFP presentan gastos de operación elevadísimos: 232.000 millones de pesos en 2005, que incluyen 855 millones de pesos en remuneraciones al directorio (17 de los cuales, incluyendo al presidente de su asociación, fueron ministros de Pinochet) y 30.542 millones en gastos de comercialización (2004). Como referencia, ese mismo año, el gasto total de operación del INP fue de 57.330 millones de pesos. Es decir, sin considerar ni las utilidades ni una serie de otros gastos, sino solamente las remuneraciones y otros gastos de administración y ventas de las AFP, éstas más que duplican el costo de operación total del INP. Sin embargo, esta última institución recauda tantas cotizaciones como todas las AFP juntas, puesto que aparte de sus propios afiliados, recibe todas las cotizaciones del sistema de salud público, FONASA, al cual están afiliados el 85% de los trabajadores. Adicionalmente, paga el triple de pensiones que el sistema privado, donde además la mayor parte no las pagan las AFP sino las cías. de seguros, como se ha visto. Aparte de ello, atiende a tres de cada cuatro adultos mayores y a casi todos los mayores de 70 años existentes en el país, que son sus afiliados, con beneficios como vacaciones y otros beneficios.

c) **que cuesta extremadamente caro al fisco:** El gasto público en pensiones equivale aproximadamente al 6% del PIB, a un tercio del presupuesto público total y a más del 40% del gasto público social (aproximadamente igual a lo que se gasta en salud y educación, juntos). Este elevado nivel de gasto público en previsión se ha mantenido por casi un cuarto de siglo. Antes de 1981, en cambio, el sistema antiguo dejaba superávit,

2.- Cómo intenta el actual proyecto de reforma previsional solucionar esas fallas

Reforzando el "pilar solidario", sobre todo mediante duplicación del aporte fiscal, a fin de que todos puedan llegar a la pensión mínima;

Eliminando la exigencia del mínimo de 20 años de cotizaciones, suprimiendo las pensiones asistenciales y remplazándolas por la **pensión básica universal**. El Estado otorgará una pensión básica a la gran mayoría de afiliados al sistema, cuya capacidad de ahorro es insuficiente. Pero se propone implementar esa medida en forma escalonada en el tiempo, es decir, no se aplica en su totalidad desde un inicio.

Adoptando diversas medidas que favorezcan e incentiven el ahorro para aumentar la contribución individual; especialmente a favor de las madres el bono de un año de cotizaciones por hijo nacido.

3.- En qué se queda corto o en que falla todavía el actual proyecto

- La Reforma no toca el sistema de capitalización individual en las pensiones mayores de \$200.000
- Se sigue obligando a todo el mundo a afiliarse a una AFP, sin alternativa. Incluso se va a forzar a los independientes a hacerlo.
- Se entregan más atribuciones a las AFPs para decidir dónde invertir los fondos, aumentándose hasta un 80% el monto que pueden mantener en el extranjero (lo que perjudica abiertamente a la economía del país, porque resta recursos propios para su desarrollo)
- No se pone tope alguno a las comisiones que cobran las AFPs por administrar.

4.- Yendo al fondo del problema: la privatización de un sistema público lleva a preguntarse dónde se encuentran los dineros aportados?

Para los chilenos, el siguiente es el balance de la privatización del sistema previsional: Entre 1990 y 2005, se les han descontado 23 billones de pesos (millones de millones de pesos del 2005) a sus salarios con este objeto. Ello equivale a un 40% del PIB del 2005. En el mismo lapso, las AFP pagaron algunas pensiones y otros beneficios, por un monto total de 4.4 billones de pesos; sin embargo, los financiaron íntegramente con subsidios fiscales, principalmente bonos de reconocimiento, los que sumaron esa misma cantidad. Una quinta parte de los 23 billones cotizados, es decir, más de 5 billones de pesos, fueron a parar a los bolsillos de las AFP y sus compañías de seguros relacionadas, en forma de comisiones. El resto, más los intereses ganados en el período, conforman los fondos de pensiones. Sin embargo ¿dónde se encuentran hoy día estos fondos? Más de la mitad de los mismos, están en manos de 12 grandes conglomerados privados - entre ellos los dueños de las propias AFP -, que operan en el país, y de 8 fondos de inversión en el extranjero. Los han recibido en préstamo, o como capital accionario, y no existe garantía alguna que los restituyan, como no sea su solvencia, la cual, como se sabe, es siempre relativa. Estos conglomerados, y las propias AFP, han sido los reales beneficiarios del ahorro forzoso de los chilenos, mientras el Estado paga todas las pensiones.

IV. El Transantiago

La puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público de Santiago se ha transformado en el peor suceso político de la Concertación en sus cerca de 20 años de gobierno. A tal grado, que no es extraño escuchar opiniones acerca del fin de esos gobiernos, e incluso –los más radicales en su juicio- se atreven a pronosticar la debacle del gobierno Bachelet. Lo que parece estar fuera de discusión es que en la Historia contemporánea del país habrá un “antes” y un “después del Transantiago”.

Y todo esto ocurre de súbito, sin advertencia, y en un sector (el transporte) que en general había cosechado hasta ahora más elogios que críticas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles son las perspectivas?

Datos del problema

El problema de la locomoción colectiva de una gran ciudad no parece presentar a simple vista aspectos difíciles, y menos aún, insolubles. Se trata de tener suficientes buses y trenes para trasladar a todos los interesados en todo momento desde y hacia los lugares que desean, a un precio asequible. Pero esta es la imagen externa del problema. Porque al interior del mismo se esconden un par de variables que pueden transformarse en trampas mortales, como lo están constatando a su pesar los funcionarios de este gobierno.

Primero: los interesados no viven repartidos uniformemente por el área de la ciudad, ni tienen las mismas necesidades de desplazamiento (origen/destino). Segundo: los interesados no se distribuyen uniformemente a lo largo del día, ni de la semana, ni de las distintas épocas del año (incluso varían de año en año en la medida que se redistribuye masivamente el parque de viviendas y lugares de trabajo). Y por último: tiene que existir un equilibrio más o menos estricto entre lo que los interesados pueden o están dispuestos a pagar y los costos y ganancias que los “operadores” están dispuestos a aceptar (incluyendo eventuales subsidios estatales en este cálculo).

Poner todas estas variables de acuerdo no es cosa fácil. En Santiago esto se había logrado en gran medida, pero gracias a una evolución y ajuste laboriosos a lo largo de 60 años. ¿Que tenía una larga lista de defectos? Indudable. Pero funcionaba. Y se podía ir a dónde uno quisiera a cualquier hora del día, cualquier día de la semana y a un precio que parecía razonable con un elevado porcentaje de seguridad de llegar a tiempo y vivo. El Transantiago –desafortunadamente- no logró ni con mucho resolver ese equilibrio. Y hace agua por todos lados. Las causas: muy variadas y complejas. Hay que empezar diciendo que no hay dos personas que tengan la misma opinión al respecto. Y esto se debe –entre muchas otras razones- a que hay demasiadas zonas oscuras en toda esta historia y a que los datos objetivos que permitirían realizar un análisis bien fundado se encuentran en gran medida ocultos, o están muy desperdigados en distintas cabezas, fuentes escritas y oficinas. De tal forma que la mayor parte de la gente (incluyendo políticos y técnicos) se limita a elaborar conjeturas, aunque las vistan de juicios exactos y fundados.

Los puntos más conflictivos de este drama:

1. **Los objetivos.** Al Transantiago se le cargaron una variedad de objetivos que –de alguna forma- se contradecían entre sí:
 - Autofinanciarse (el Mandamiento N°1 del credo neoliberal y de los ministros de Hacienda)
 - Incentivar el uso del transporte público en desmedro del automóvil
 - Bajar drásticamente la cantidad de buses circulando
 - Modernizar el parque de buses
 - Mediante las tres medidas anteriores, lograr una baja significativa en los niveles de congestión vehicular y de contaminación del aire y acústica

- Racionalizar el sistema y la malla de recorridos, permitiendo trasbordos expeditos entre sus componentes (sin necesidad de nuevos boletos)
 - Automatizar el sistema de expedición y cobro de pasajes
 - Bajar sensiblemente los tiempos de viaje
 - No subir “en lo posible” el valor del pasaje
2. **El financiamiento.** Es un punto absolutamente oscuro. Ni la oposición lo tiene claro, y dudamos que en el gobierno haya alguien que lo maneje en toda su extensión. Como los dineros en juego son de gran magnitud (los 800 buses que es necesario comprar ahora cuestan US\$ 130 millones, por ejemplo) y los participantes y entidades directamente interesadas son tantos, y dadas las experiencias que se conocen de otras áreas de gobierno y de interrelación gobierno-privados, no sería raro que toda esta confusión y desconocimiento oculte más de un manejo doloso, con tráfico de influencias incluido.
 3. **El diseño.** Con seguridad efectuado por tecnócratas sentados a un escritorio detrás de un computador, sin conexión mayor con el mundo real y sin experiencia práctica en el tema.
 4. **La malla de recorridos.** El reticulado de alimentadores y troncales –con el Metro como columna vertebral- claramente no resuelve las necesidades de una urbe de crecimiento explosivo y anárquico como Santiago.
 5. **El sistema de cobro.** En principio, bien pensado, pero en la práctica un tremendo fiasco, puesto que impide el acceso y desplazamiento rápido de los pasajeros al interior del bus, y en gran medida fomenta el no pago (la “evasión”, que la llaman)
 6. **La Información.** Pese a los millones gastados antes y después de la puesta en marcha (y que se sigue gastando), la información que maneja el gran público es extremadamente pobre, pues es de compleja comprensión, no está didácticamente presentada, es a menudo confusa y a veces definitivamente inexacta, faltando por completo en muchos lugares.
 7. **El material rodante.** Los buses nuevos son francamente incómodos por sus desniveles internos y la falta de suficientes y adecuados soportes para los pasajeros. La gran mayoría de los buses no tienen indicación lateral ni trasera de su N° de Recorrido.

El ingreso del Transantiago a la política

En estos momentos, el problema está empezando a explotar: con un Metro abiertamente colapsado a varias horas del día y con un ánimo cada vez más caldeado, se están abriendo paso todo tipo de especulaciones y soluciones para el futuro: desde la declaración franca y clara de que el sistema fracasó y que hay que “volver a las micros amarillas” (con diversas variantes embellecedoras, y que gana adeptos especialmente entre los técnicos de la derecha), hasta los cantos de sirena de Frei y otros próceres que ahora hablan de estatizar. Lo que no es posible ocultar es que –detrás de todas las críticas y propuestas- está primando: primero, el interés político contingente; segundo: el interés monetario.

Sea como sea, el Transantiago entró definitivamente en el campo político, va a ser objeto de muchos tira y afloja, y probablemente obligue a una transacción de gran envergadura entre gobierno y oposición, dejando –eso sí- un reguero de heridos y contusos por el camino. Los efectos para la gente común tardarán mucho más en manifestarse, y no necesariamente serán tan favorables como se piensa y se espera (salvo que el ánimo de protesta adquiera suficiente volumen, cosa que en estos momentos no es nada de clara).

Visto desde esta perspectiva, el problema del Transantiago adquiere otra dimensión en el tiempo: parece augurarse una prolongación indefinida de los difíciles momentos que la población y los políticos –cada cual a su manera- han vivido en estos últimos meses, pues ninguna de las graves falencias arriba señaladas es de fácil o rápida solución (si es que posee una solución realista). En la práctica es probable que el nuevo ministro Cortázar, en vez de ser el médico que aparece curando el

mal, termine haciendo de enfermero, que coloca parche tras parche, con el solo fin de calmar al paciente...(habría que preguntarse ¿cuán paciente es el paciente?).

Reflexiones de fondo – más allá del Transantiago.

La experiencia del Transantiago –al margen de los problemas técnicos y prácticos que todos vivimos y conocemos- ha permitido revelar un par de claves de fondo que pocos analistas y políticos (aún menos en el Gobierno) han examinado, o tan siquiera, mencionado:

1. **El desastre urbanístico:** quedó demostrado que Santiago ha crecido en los últimos decenios dentro de un modelo de alta segregación social/espacial, con sectores de elevados ingresos por un lado, y sectores de pobreza y pobreza extrema (poblaciones de “vivienda social”) por el lado opuesto. Y como el funcionamiento y la vida de la ciudad requieren una integración –aunque tan solo sea temporal- de sus ciudadanos, el trasladar diariamente a millones de personas que viven separados se convierte en una necesidad imperiosa, pero titánica a la vez;
2. **Las políticas de desarrollo del Estado:** nadie en el Gobierno ha querido explicar por qué el Estado ha intervenido en forma tan tímida en esta área (al entregar la responsabilidad casi completa del transporte urbano a los privados), y cuando ha intervenido, lo ha hecho equivocando lamentablemente las prioridades (más de US\$ 2.000 millones en autopistas urbanas; cerca de esa cifra en nuevas líneas de Metro; sólo US\$ 200 millones en el Transantiago; siendo que la rentabilidad social de las inversiones es inmensamente superior en esta última alternativa). Sin embargo, no se necesita ser muy perspicaz para entender que lo que hay detrás de esta aparente contradicción es la sujeción cada vez más clara y tozuda de los gobiernos de la Concertación a los postulados neoliberales. En efecto, se trata de: a) reducir a un mínimo el papel del Estado; b) confiar en el mítico “mercado” la regulación de los procesos y las variables económicas; c) favorecer a las grandes empresas y conglomerados, permitiéndoles obtener enormes ganancias en áreas que antiguamente eran de responsabilidad mayoritaria del Estado.
3. **El factor ciudadano.** Como nunca, en este caso quedó palmariamente expuesta la forma superestructural, elitista y prepotente de diseñar e implementar políticas de la Concertación a través de sus distintos gobiernos. Y esto no sólo se refiere a la nula participación de la población en el diseño e implementación de un sistema cien por ciento destinado a su uso (lo que de por sí es bastante grave), sino también a la poca o nula relevancia que los políticos y funcionarios gubernamentales de todo nivel asignan a sus “representados” al elegir y justificar las medidas que supuestamente les favorecen: se tiene la impresión muy marcada de que las medidas públicas de administración se deciden y llevan a efecto principalmente para satisfacer intereses extraños (¿electorales?, ¿económicos?, ¿búsqueda de prestigio con obras monumentales?, ¿amiguismos/coimas?) más que para resolver problemas reales y concretos de la población.

v. El contexto latinoamericano de movimientos sociales en crisis del neoliberalismo

Crisis orgánica, refundaciones neoliberales y proyectos alternativos. Los fantasmas que recorren el continente.

La década de los noventa en América Latina puede ser caracterizada por la hegemonía aplastante del capital financiero y especulativo que sustentó, y se benefició, de la serie de ajustes estructurales y reformas sociales que instalaron el modelo neoliberal en las sociedades de la región. En ese contexto, acentuado además por la crisis final de los socialismos reales y la derrota electoral de la revolución en Nicaragua, las clases dominantes instalaron un modelo de sociedad que, revestido de democracia, negaba toda posibilidad de organización y expresión de proyectos políticos sustentados en los intereses de los sectores populares. Neoliberalismo a ultranza y pensamiento único, en suma, configuraban un escenario político bastante sombrío para el pueblo, en

donde su práctica política posible aparecía reducida a la formalidad que le entregaba las elecciones periódicas.

Movimientos sociales en tiempos de crisis del neoliberalismo:

Una excepción importante a este panorama gris, sobre todo importante de destacar (como veremos) por su influencia en los criterios organizativos y de acción que hoy asumen los principales movimientos sociales latinoamericanos, fue la emergencia del zapatismo (EZLN) en la selva Lacandona. En efecto, los zapatistas hicieron ingresar en el alicaído escenario político y en el debate una serie de temas que hoy aparecen como centrales en la organización de movimientos sociales como los que se desarrollan en Bolivia, Ecuador, Brasil, etc., como son las ideas de *autonomía*, *horizontalidad* organizativa, diversidad en las temáticas a levantar como demandas populares, entre otras.

Elementos para una caracterización de los movimientos populares en América Latina.

Se asiste en la actualidad a una serie de movimientos populares (zapatismo, sin tierra, comunidades indígenas en Ecuador y Bolivia, etc.) y expresiones colectivas de descontento (por ejemplo, las recientes protestas en el campo de la educación en Chile y Argentina), que apuntan a un horizonte que va *más allá* del neoliberalismo. A ello se suma la instalación de los denominados “gobiernos progresistas” que desde el Frente Amplio uruguayo al proceso de construcción del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, pasando por el gobierno del MAS en Bolivia y el plebiscito por la reforma constitucional en el Ecuador gobernado por Correa, plantean desafíos a la hegemonía absoluta del neoliberalismo ortodoxo.

Tensiones y contradicciones

Sin embargo, no se trata de asumir un optimismo desenfrenado, pues todos estos procesos se ven atravesados por tensiones y contradicciones que dan cuenta de un momento de crisis del neoliberalismo, en el cual se llevan a cabo una serie de disputas por definir el sentido posible que asumirá la salida de esta crisis, ya sea por medio de procesos de refundación neoliberal (como pareciesen apuntar parte importante de los “gobiernos progresistas” mediante la reconstitución del peso político y económico de las burguesías nacionales) o de avance de proyectos alternativos (particularmente, los casos de Bolivia y Venezuela que en el último tiempo han dado signos, al menos, de transformaciones profundas en el ámbito del control de la producción económica mediante la nacionalización de sus principales recursos naturales). Esta crisis del neoliberalismo pareciese tener su sustento, en parte importante, en las mismas contradicciones y malestares sociales que el avance del neoliberalismo ha ido provocando durante los últimos años, como lo revela las recientes protestas de los estudiantes secundarios en Chile. O, en otros casos, se trata de resistencias abiertas a un nuevo avance del neoliberalismo y sus lógicas privatizadoras de lo social, como ha sido la defensa de los recursos naturales en Bolivia o, más recientemente, de la educación pública en Argentina. Como quiera que sea, los signos de crisis de legitimidad del neoliberalismo son evidentes, llevando a la configuración de un momento político de disputa por refundar la estabilidad social o abrir el cauce para la instalación de proyectos alternativos.

Una señal importante que, hace algunos días, puso en evidencia el carácter del actual momento, es el tono y los mensajes que se desprendieron, para toda América Latina, de la reciente visita de Ratzinger a Brasil. En efecto, cuando se esperaba que el centro del debate estuviese en temas valóricos (aborto), Ratzinger se preocupó de instalar fuertemente un discurso político (con amplias resonancias en los medios de comunicación) que advertía sobre los “riesgos” que hoy experimentan las sociedades latinoamericanas de dejarse llevar por proyectos que atenten contra la paz y la estabilidad social. Una vez más, en suma, la cruz y la espada mostraron su íntima comunión cuando se trata de espantar *a los fantasmas que recorren el mundo* en tiempos de crisis.

El momento de crisis y los movimientos sociales. El caso boliviano.

El reciente proceso político en Bolivia representa, dentro del contexto recién descrito, uno de los puntos claves de puesta en jaque del neoliberalismo, sobre todo a partir de la potencia que ha

manifestado el movimiento popular a partir de sucesivos procesos de enfrentamiento y resistencia a los intentos de privatización de sus recursos naturales levantados por las clases dominantes en nombre de la modernización del país.

En efecto, en el año 2000 se abre un ciclo de protestas en Bolivia a partir del intento de privatización del agua, cuyos enfrentamientos principales radicaron en Cochabamba (“Guerra del agua”). El ciclo continuó con la insurrección de Octubre de 2003 que provocó la caída de Sánchez de Losada, las protestas para frenar la venta del gas, las manifestaciones de Abril – Mayo en 2005, entre otros eventos donde se hizo manifiesto el descontento y la acción colectiva popular. En suma, se trata de un ciclo de levantamientos y protestas populares que implicó, además de la caída de dos presidentes, la progresiva deslegitimación del modelo neoliberal, así como de las instituciones políticas administrativas (Estados, gobiernos locales) y representativas (Partidos políticos tradicionales) ligadas a los intereses dominantes. En otros términos, cada una de las embestidas de la clases dominantes en pos del modelo neoliberal, mediante intentos de privatización, encontró el enfrentamiento activo **de fuerzas populares y actores sociales constituidos desde la resistencia**, que progresivamente fueron resquebrajando las bases de legitimidad del modelo y sus instituciones políticas. En ese vacío, en esa crisis de legitimidad abierta, la experiencia política del MAS evidencia la construcción de una vía que apostó, precisamente, a vincularse con las expresiones de descontento y enfrentamiento del movimiento popular a la vez que a la apertura e instalación refundadora de un régimen político vaciado de sentido y legitimidad de masas.

Interesa comentar los principales rasgos (criterios de organización y acción, formas de expresión, demandas, etc.) que asume el movimiento popular en Bolivia, en el entendido de que ello subyace a la crisis de legitimidad del modelo neoliberal, el ascenso de Morales al gobierno, y que se continúa manifestando hasta hoy.

En primer término, se destaca en la experiencia de construcción del movimiento popular su fuerte anclaje territorial, expresado en el establecimiento de vínculos y formas de acción basadas en las experiencias y estilos de vida propios de comunidades locales. Se trata, principalmente, tanto de comunidades aymaras organizadas en sectores rurales, como de comunidades urbanas (barrios, juntas vecinales), particularmente evidentes en las movilizaciones sociales generadas desde la zona de El Alto. Estas comunidades, ya sea urbanas o rurales, apuestan fundamentalmente a formas de acción y expresión colectiva que buscan el control local de sus dinámicas y formas de vida, sustrayéndolas en parte importe al control estatal y sus instituciones de administración. Así, por ejemplo, en no pocas comunidades se constituyen espacios de organización y resolución colectiva de temas como la producción económica y el consumo (distribución), pero no sólo de eso, sino que también se formaron instancias de control de la administración de la seguridad barrial y la justicia. En suma, se aprecia que son formas de acción colectiva que no se dirigen fundamentalmente a levantar demandas hacia el Estado o sus instituciones, sino que apuestan por el control local de sus dinámicas y formas de vida. Ahora bien, esta situación solo adquiere pleno sentido a partir de lo anteriormente mencionado: el **profundo resquebrajamiento de la legitimidad del Estado y sus instituciones administrativas-representativas**, o sea, una suerte de ausencia de injerencia efectiva del Estado, por lo cual éste deja de ser leído como interlocutor válido de las protestas y manifestaciones populares.

Sin embargo, ello no implica una absoluta retirada hacia lo local y las comunidades, sino que también, en el marco de la ya mencionada resistencia a los procesos de privatización neoliberal, se dan fuertes enfrentamientos con el Estado y sus mecanismos de represión – control social. Cabe destacar que las formas en que se organiza y manifiesta este enfrentamiento se basa en las comunidades locales, toda vez que estas en primera instancia toman cuerpo en asambleas masivas en plazas o barrios, a partir de lo cual se despliegan una multiplicidad de acciones de enfrentamiento a las fuerzas represivas del Estado. Finalmente, los enfrentamientos concluyen con

una nueva concentración masiva, cerrándose el *juego de concentración – dispersión* a través del cual se organiza y expresa la protesta popular³.

En el plano de su de organización, los movimientos populares en Bolivia hacen carne de los criterios ya mencionados en relación a la experiencia zapatista: autonomía de las instituciones formales, articulación de redes de solidaridades locales, decisiones colectivas desde lo micro, rotatividad de la dirigencia, etc. Ello, en momentos de enfrentamientos particularmente intensos, da paso a la articulación de espacios locales de organización y decisión colectiva con tal de fortalecer la protesta popular.

Como se puede apreciar, son tres los rasgos que pareciesen definir buena parte de la particularidad y potencia del movimiento popular boliviano. Se trata de **actores y fuerzas sociales constituidos desde la resistencia al avance del neoliberalismo**, que se sustentan y apuestan al control de las dinámicas presentes en su **comunidad o espacio local**, y que logran parte importante de su efectividad y potencia en **un marco de crisis de legitimidad del modelo neoliberal y sus instituciones políticas**.

La llegada de Evo Morales al gobierno en enero de 2006, si bien ha implicado un apaciguamiento de los brotes y estallidos sociales, no puede leerse como una desactivación de los movimientos populares y sus formas de expresión, dada la profundidad de la crisis de legitimidad del régimen político en el cual transcurre el ascenso del MAS al gobierno. Así, si por una parte, el gobierno se ha articulado sólidamente con el movimiento popular para lograr avances en procesos como la nacionalización de los hidrocarburos, enfrentando los intereses de las clases privilegiados y la presión del imperialismo, al mismo tiempo este movimiento – o al menos sectores importantes de éste – continúan planteando tensiones importantes a la acción gubernamental.

En este último ámbito, un punto particularmente tenso, al menos en el debate, ha sido la nueva articulación que se busca construir entre Estado y comunidades para volver a dotar de legitimidad al régimen político y sus instituciones. El gobierno, por un lado, ha impulsado fundamentalmente la intención de construir un Estado multicultural que reconozca las matrices y patrones culturales de los pueblos indígenas, mientras que, por el otro, sectores del movimiento popular ven en esto sólo una pretensión de reconocimiento formal, de acoplamiento al status quo, levantando con fuerza la demanda por la autonomía y la autodeterminación.

Reflexiones y debates a partir de la situación política en Chile.

En el caso boliviano, se trata de una situación en que el bloque en el poder ve resquebrajadas sus bases de legitimidad de masas, a la vez que emergen actores que constituidos desde la resistencia se enfrentan al avance del modelo neoliberal.

En el caso chileno, el resquebrajamiento de las bases de legitimidad de masas del modelo neoliberal encuentra su expresión en manifestaciones de descontento y malestar, como las vividas recientemente en ámbitos como la educación, el transporte público, la salud, o la precariedad del empleo en zonas económicas fuertemente dinámicas (actividad forestal). Sin embargo, pareciese ser que ese descontento no da paso a una abierta crisis social y política, sino que logra ser contenido en parte importante por nuevas formas de articulación y reordenamiento del bloque en el poder. Las clases dominantes, en suma, aparecen volcadas en esfuerzos – atravesados por tensiones y disputas internas a sus coaliciones políticas – por apropiarse del malestar presente en la población y dirigirlo en pos de la afirmación del status quo.

Aquello pareciese relacionarse con dos procesos que, a diferencia de lo mencionado en Bolivia, dificultan considerablemente la constitución de un movimiento popular capaz de levantar alternativas públicas a la crisis de legitimidad del modelo.

Por una parte, se trata de un proceso político posible de caracterizar como una *contrarrevolución neoliberal madura*, en el sentido de que lo fundamental de las reformas y transformaciones

³ Esta descripción de la protesta como juego de concentración-dispersión se encuentra mayormente desarrollada en el reciente libro de Raúl Zibechi: *Dispersar el Poder. Los movimientos como poderes antiestatales*.

privatizadores ya fue realizado, no vislumbrándose la posibilidad de actores que se constituyen desde la resistencia al avance de la privatización., como en Bolivia. En Chile, por el contrario, se trata de actores desconstituidos, fragmentados, que operan en realidades ya privatizadas o transformadas por el neoliberalismo, por el cual la protesta asume un rasgo más bien de enfrentamiento directo que de resistencia a un avance, lo cual plantea dificultades no menores. Por decirlo en un caso concreto: las protestas desde la educación son de enfrentamiento a una legalidad y sistema que ya opera, no de resistencia o defensa a un avance privatizador.

Y por otra, la crisis de legitimidad del modelo acá no pareciese vincularse a una pérdida de legitimidad del Estado y sus instituciones, sino que, por el contrario, éste muestra la capacidad de reformular una y otra vez sus mecanismos de control y administración de la vida social, imposibilitando la constitución de alternativas (por ejemplo, mediante políticas de seguridad). Mientras en Bolivia la crisis alcanzaba a un Estado ausente o vaciado de legitimidad, en Chile sólo se vincula a críticas a personalidades políticas (piénsese, por ejemplo, en el tema de la corrupción) pero no a la institucionalidad administrativa y representativa misma. Ello permite, entonces, que el malestar sea articulado y cooptado desde esa misma institucionalidad, en vez de encontrar cauces y expresiones alternativas.

En suma, el debate que pareciese abrirse desde la situación política chilena refiere a cómo enfrentar un momento político en que las contradicciones sociales arrastradas por el neoliberalismo minan su legitimidad de masas, desencadenando evidentes situaciones de malestar y descontento, pero que no arriban a la constitución de alternativas populares capaces de poner en jaque a la hegemonía de los poderosos. Intentar diagnosticar, en suma, las expresiones de ese malestar y sus posibilidades de construcción política en disputa con las apuestas de los intereses dominantes, aparece como un debate central a tener en cuenta en Chile hoy.

Taller de Análisis de Coyuntura Económica y Política, TACEP:

Informaciones en [25Hwww.cctt.cl](http://www.cctt.cl), 26Hcctt@cctt.cl y 27Hlaconvergencia@gmail.com El TACEP es una iniciativa sostenida y llevada a cabo actualmente por militantes de diversos movimientos que se coordinan en un encuentro de "Convergencia". En el taller participan también otras personas y militantes de diferentes organizaciones interesados en poner a disposición de los trabajadores y sectores populares una visión crítica de la realidad nacional e internacional. Si deseas incorporarte a los grupos de trabajo escríbenos; si deseas colaborar en difundir los Informes Trimestrales, reproducélos parcial o totalmente indicando la fuente. Si no desea continuar recibiendo el **Informe Trimestral**, envíenos un e-mail a la dirección indicada solicitando la baja de IA mail-list.



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios "Miguel Enríquez", CEME: <http://www.archivochile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)

Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social, político y cultural, básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quienes agradecemos poder publicar su trabajo.